

S.C. T.208. LXXXIV.-

*Procuración General de la Nación*



Suprema Corte

- I -

A fs. 7/9, la Provincia de Tucumán inició ejecución fiscal contra la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos -ENCOTEL-, por acreencias en razón del impuesto a los ingresos brutos por los periodos fiscales 9/90 a 2/92, 3/92 a 12/92 y 1/93 a 5/93 -todos incluidos-, conforme consta en los títulos ejecutivos pertinentes.

- II -

A fs. 33/41, se presentó el Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos -MEyOSP, en adelante-) y, tras indicar que conforme la Res. n° 558/98 se dio por concluida la liquidación de ENCOTEL y que, por ende, se extinguió su personería jurídica, contestó demanda y opuso excepciones.

En primer término, arguyó la defensa de pago parcial documentado al expresar que, en el marco previsto por las Leyes n° 24.133 y 24.154, el 30 de marzo de 1993 suscribió con la ejecutante el acuerdo de saneamiento definitivo de la situación financiera entre el Estado Nacional y la Provincia de Tucumán al 31 de marzo de 1991. Así, dijo, se pretende ejecutar una deuda que, al menos parcialmente, fue objeto expreso de tal acuerdo (periodos 9/90 a 3/91 inclusive, del gravamen reclamado).

Luego, sostuvo que la acreencia reclamada se encuentra prescripta, pues resulta de aplicación el lapso de cinco años, conforme con el texto del art. 52 del Código Tributario de la provincia, vigente al momento de devengarse la deuda, sin que pueda aplicársele la reforma de la Ley N° 6 758 que, a partir del 10 de mayo de 1996, extendió a diez años el periodo de prescripción, ya que la aplicación retroactiva de dicha norma a relaciones jurídicas nacidas antes de su entrada en vigor, lesiona su derecho de propiedad.

En tercer lugar, opuso excepción de inhabilidad de título. Por una parte, negó la existencia de la deuda reclamada por el tributo, pues arguyó que la provincia carece de potestad constitucional para aplicarlo sobre una empresa del Estado Nacional dedicada a la prestación del servicio público de correos, sin fines de lucro, actividad cuya regulación corresponde a la Nación, según el inc. 14 del art. 75 de la Constitución Nacional y cuyo producto, además,

forma parte de las rentas del tesoro nacional, según el art. 4º de la Carta Magna. Se contrapone así a la Ley nº 19 654 de creación de ENCOTEL. Y, por otro lado, sostuvo que, según el art. 208, inc. b), del Código Fiscal, su actividad se encuentra exenta del impuesto sobre los ingresos brutos.

- III -

A fs. 43/47, la actora contestó el traslado de las excepciones. Indicó, respecto a la excepción de pago parcial documentado que, contrariamente a lo pretendido por la ejecutada, la deuda por los períodos comprendidos entre septiembre de 1990 y marzo de 1991 no fue incluida en el Acuerdo de Saneamiento Definitivo de la Situación Financiera entre el Estado Nacional y la Provincia de Tucumán del 21 de diciembre de 1992, puesto que se hizo reserva expresa -por su parte- en cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos anteriores al 31 de marzo de 1991.

Negó que la deuda esté prescripta, puesto que -según menciona- al haber requerido en diversas oportunidades el pago, se ha interrumpido el curso de la prescripción, conforme el art. 57 del Código Tributario local. En estas circunstancias, al modificarse el plazo de prescripción del art. 52 elevándolo a 10 años (Ley Nº 6758) y, al no existir prescripción cumplida, le es aplicable este último término, sin que pueda alegarse afectación alguna de derechos adquiridos.

Por último, rechazó la excepción de inhabilidad de título, al afirmar que ella no se basa en vicios extrínsecos del título, sino que intenta atacar la causa de la obligación, tema que deberá ser, en todo caso, objeto de discusión en un juicio ordinario posterior.

- IV -

A mi entender, tal como se sostuvo en el dictamen de fs. 11, la causa es de la competencia originaria del Tribunal y, por tanto, conforme la vista corrida respecto del planteamiento efectuado por la actora a fs. 36/40, emito opinión en cuanto al fondo del asunto.



## *Procuración General de la Nación*

- V -

En primer lugar, estimo del caso señalar que, al cuestionar el tributo cuya ejecución se intenta en autos, con sustento en que la provincia actora carece de potestad constitucional para aplicarlo, se ha puesto en tela de juicio la existencia de la obligación, por lo que corresponde, entonces, considerar de manera preliminar este tema, toda vez que se controvierte un presupuesto esencial de la vía ejecutiva, como es la exigibilidad de la deuda, sin cuya concurrencia no habría título hábil (conf. Fallos: 295:338 y sus citas; 311:1365; 314:1796).

Por otra parte, ha de tenerse presente que la delimitación de las órbitas de competencias entre el Gobierno Federal y los Estados provinciales, como lo ha sostenido el Tribunal, es una de las más trascendentes funciones jurisdiccionales que ejerce en instancia originaria (Fallos: 307:1379; 314:1796).

- VI -

En mi opinión, la solución del problema planteado halla adecuada respuesta en lo expresado en el dictamen de este Ministerio Público vertido en la causa C.900, L.XXII, *in re* "Chaco Pcia. de c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) s/ ejecución fiscal", del 23 de diciembre de 1992, y reiterado -por remisión- en el dictamen de la causa E.110, L.XXIV, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa, del 29 de noviembre de 1996, litigios donde se ventilaba una cuestión sustancialmente similar a la tratada en el *sub lite*.

En la primera de las causas citadas, la provincia actora había realizado un reclamo ejecutivo respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, considerando que, con el dictado de la Ley nº 22.016, no existían trabas para la gravabilidad de las empresas nacionales. El entonces Procurador General de la Nación sostuvo, en términos rotundos que creo menester reproducir por su pertinencia, la solución contraria, al decir que "debe tenerse presente que el poder fiscal de la Provincia para incluir a ENCOTEL como sujeto pasivo del tributo en cuestión se encuentra limitado a raíz de lo establecido por los arts. 4 y 17 de la Constitución Nacional.

"Así lo pienso, por cuanto la 'renta de correos' integra el grupo de los recursos con los cuales se forma el Tesoro Nacional, según el citado art. 4º, y la naturaleza de esa 'renta'

es ajena a los resultados que pueda arrojar la actividad de la empresa nacional. En otras palabras, debe reputarse reñido con la intangibilidad inherente a la magnitud de los ingresos que constituyen la renta mencionada admitir la detracción que, como costo adicional para el ejercicio de la actividad de ENCOTEL en la Provincia, significa la tributación local sobre los ingresos brutos.

“Si bien la Constitución Nacional no se ocupa de los aspectos concernientes a la organización de los servicios que permiten devengar la ‘renta de correos’, la circunstancia que se manifiesta en la prestación de los servicios pertinentes por órganos de la administración pública descentralizada y, posteriormente, por la actual empresa pública, no puede, en modo alguno, desvirtuar la idea y la doctrina que la Carta sustenta respecto de la propiedad que adjudica al Tesoro Nacional de los ingresos que forman esa ‘renta’.

“Vale decir, que el concepto de ‘renta’ que emplea la Constitución no es el de renta ‘neta’ sino el de renta ‘bruta’. De ahí, que deba rechazarse la posibilidad de que se someta a tributo alguno por las provincias el ingreso que compone esa renta.”.

Citaba, el dictamen, lo manifestado respecto del concepto de “renta de correos” por los miembros de la Asamblea General Constituyente de 1853, en especial, en la discusión realizada en la sesión del 22 de abril de ese año entre los convencionales Gorostiaga, Leiva y Seguí, quienes se refirieron a la renta de correos como uno de los recursos que conformaban el Tesoro Nacional, en la bien entendida idea de que sin rentas efectivas no podría existir un gobierno nacional.

En ese orden de ideas, opino que el tributo en cuestión se manifiesta en abierta colisión con una interpretación auténtica del sentido y de la naturaleza que la propia Carta Magna asigna a las fuentes que nutren el Tesoro Nacional.

Considero que también debe quedar en claro, como se expresó en el dictamen de mentas, que no obsta a lo expresado que la magnitud relativa de la renta de correos, en su cotejo con los demás recursos de que dispone el Estado Nacional, tenga una pequeña cuantía, ya que no se trata de un problema estrictamente financiero o presupuestario sino de dar efectivo y pleno cumplimiento a una norma de la Constitución.

*Procuración General de la Nación*

- VII -

Tengo para mí que resulta adecuada la hermenéutica que propicio, puesto que la admisión de la existencia de un gravamen provincial sobre un ingreso que integra los recursos que forman el Tesoro Nacional conduciría al absurdo de hacer viable la aplicación de impuestos o contribuciones locales sobre alguno de los demás ingresos tributarios (aduaneros o los internos) que lo alimentan.

Así, quedaría expedita la vía para que los Estados provinciales gravaran, por ejemplo, los recursos tributarios de los que dispone el Gobierno Nacional, con la consiguiente merma y detracción de sus legítimas fuentes de financiamiento y la obstaculización de dichos instrumentos de gobierno, situación que no es querida, en momento alguno, por nuestra Constitución Nacional. Desde mi óptica, no es ocioso señalar aquí que una cosa es que la Carta Magna establezca la concurrencia entre la Nación y las provincias respecto de una misma fuente de renta (v. gr. la imposición indirecta, art. 75, inc. 2, primer párrafo) y, cosa muy distinta es que, so pretexto de utilización de legítimas postestades, se pretenda la concurrencia sobre el producido obtenido por la Nación de una determinada fuente de réditos y se detraiga, así, una porción de dicho producto.

Entiendo que no resulta óbice a lo expuesto la circunstancia de que, para “arreglar y establecer los correos generales de la Nación” (art. 75, inc. 14 de la Carta Magna) y así organizar la prestación del servicio correspondiente, el Gobierno Nacional haya recurrido, en lo que interesa al *sub examine*, a brindar el servicio mediante la creación de una empresa nacional como ENCOTEL (Ley 19.654) o que, como ocurrió más tarde, haya puesto el servicio a cargo de una sociedad anónima regida por los arts. 163 al 314 de la Ley 19.550, y de la cual conservaba todas sus acciones (ENCOTESA, según Decreto del Poder Ejecutivo nacional nº 214/92, modificado por los Decretos Nos. 2792/92 y 1163/93).

- VIII -

Por otra parte, cabe poner de resalto que la solución propiciada está en consonancia con reiterada doctrina del Tribunal en cuanto a las competencias provinciales en materia tributaria.

Ha admitido V.E. que no es objetable “la facultad de las provincias para darse leyes y ordenanzas de impuestos y, en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar

y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 108 de la Constitución (actualmente, art. 126); siendo la creación de impuestos, elección de objetos impositivos y formalidades de percepción, del resorte propio de las provincias, porque entre los derechos que hacen a la autonomía de ellas es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña (Fallos: 7:373; 105:273; 114:282; 137:212; 150:419). Pero ha debido admitirlo, con la salvedad de que aquellas leyes impositivas no graven bienes existentes fuera de sus límites políticos, o actos con efectos en extraña jurisdicción; o que sean por otras razones contrarias a la Constitución" (Fallos: 235:571).

En esa tesitura, ha sostenido que la facultad de las provincias para gravar toda actividad comercial e industrial que se desarrolle dentro de su territorio tiene, entre otros límites, aquéllas que expresamente han sido reservadas a la Nación, tales como las de Correo y Aduana (Fallos: 179:42; 235:571, voto del Dr. Orgaz; 278:210; cons. 6°).


Además, lógico es suponer que si las provincias han delegado en la Nación tanto la obligación de establecer el sistema de postas y correos, como la facultad de obtener una renta de ello, no puede entonces la conducta posterior de los Estados locales menoscabar o dificultar, de forma alguna, ambos cometidos.

- IX -

Dada la forma en que, a mi modo de ver, la cuestión queda resuelta, considero inoficioso pronunciarme sobre el restante punto comprendido en la vista concedida, vinculado con la interpretación del art. 208, inc. b) del Código Fiscal local.

- X -

Opino, por tanto, que corresponde declarar la inconstitucionalidad del tributo local respecto de las rentas de correos obtenidas por la Nación a través de ENCOTEL y, en consecuencia, hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada y rechazar la demanda iniciada en autos por la provincia de Tucumán.

Buenos Aires,  de septiembre de 2000.-

ES COPIA

NICOLAS EDUARDO BECERRA

  
ALICIA BEATRIZ YOSI  
SUBDIRECTORA ADJUNTA  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

23-8-1999.